

10. ¿Y si mientras tanto creamos instituciones comunitarias? Los vacíos urbanos como oportunidades

Helena Cruz Gallach

Doctora en geografía e investigadora en el IGOP (Universidad Autónoma de Barcelona)

Rubén Martínez Moreno

Investigador en el IGOP (Universidad Autónoma de Barcelona) y miembro de La Hidra Cooperativa

Desde que se hicieron evidentes las consecuencias del estallido de la burbuja inmobiliaria, en el paisaje urbano se han empezado a desarrollar nuevas prácticas de intervención en la ciudad. Unas prácticas que propugnan un cambio del modelo urbano, alejado del expansionismo especulativo de las últimas décadas y orientado hacia la regeneración y reapropiación de la ciudad construida. Solares vacíos, equipamientos en desuso y espacios abandonados son el foco de atención de muchos colectivos ciudadanos que se han activado para fomentar su apertura mientras no se ejecuten los planes urbanísticos vigentes. Así, donde estaba previsto que se construyera un equipamiento se crea un huerto urbano; donde no hay recursos para construir un polideportivo, se diseña un plaza. El urbanismo formal, a menudo por lento y rígido, se ha visto alterado por iniciativas ciudadanas que cambian el rol de vecinos y vecinas, que pasan de ser meros usuarios a diseñadores y constructores del espacio público.

El impulso de la ciudadanía y el contexto de crisis y austeridad han provocado también alteraciones en las formas de gobierno del territorio y en las políticas urbanas impulsadas desde las administraciones locales. Distintos municipios han implementado programas que fomentan la apertura y la transformación temporal de solares vacíos o acuerdos de autogestión de equipamientos públicos. Los vacíos urbanos representan uno de los principales retos de la gestión urbana y en muchos municipios la ciudadanía hace tiempo que presiona para la apertura de solares y la reapropiación de estos espacios olvidados. Como respuesta, varios ayuntamientos han iniciado programas de reactivación temporal de solares o equipamientos públicos, a pesar de que gran parte de los vacíos son de propiedad privada. Es en esta lógica en la que debe entenderse el Pla BUIITS («Plan Vacíos»).

El Pla BUIITS se puede entender como una reacción institucional a la aparición de nuevos movimientos urbanos y colectivos sociales que reclaman un nuevo uso para espacios económicamente desvalorizados. Bajo el

discurso de «la gestión del mientras tanto», este programa trata de responder a la necesidad de «superar una época de incertidumbre» en relación con el modelo de ciudad, una forma de gestionar el espacio público y algunas «infraestructuras obsoletas». Con estas palabras nos resumían el proyecto desde el Área de Hábitat Urbano del Ayuntamiento de Barcelona. Nos comentaban que el programa responde a la necesidad de involucrar a «nuevos actores sociales» en el diseño y la implementación de «mecanismos de corresponsabilidad como una forma de resolver las demandas sociales». Una vía para pluralizar los agentes implicados; «ir más allá de la lógica de la negociación con las asociaciones de vecinos; tratar de añadir nuevos agentes» en el proceso político.

Y es en este momento, en el intento de interpelar a nuevos sujetos sociales (individuales o colectivos), de establecer un trato formalizado con prácticas informales y de codificar como norma lo que antes eran relaciones tácticas, cuando nos asaltan algunas de las preguntas clásicas de este tipo de proceso: ¿la institucionalización aviva las comunidades o las debilita? ¿La institucionalización sistematiza y optimiza las prácticas ciudadanas o las burocratiza? Un proceso de relación institucional como el Pla BUIITS, ¿fortalece la gestión comunitaria o la subsume en los esquemas del *management* público? Revisando las voces de agentes implicados y algunos datos acumulados en procesos de investigación en los que hemos participado, queremos asumir como propias estas preguntas e intentar aportar algunas reflexiones.¹¹⁰

Somos conscientes de que estas preguntas son demasiado complejas y que difícilmente conseguiremos obtener respuestas contundentes, aunque tampoco es este nuestro objetivo. Queremos que nuestras aportaciones sirvan, más que para responder de forma cerrada, para poder hacer estas preguntas un poco más manejables y, puede que, superar algunos tópicos respecto a los efectos positivos o negativos producidos por los vínculos entre colectivos sociales y la administración pública.

A continuación, lanzamos estas ideas en tres apartados distintos muy relacionados entre sí con el objetivo de ordenar y hacer un recorrido sobre temas recurrentes relacionados con los procesos de institucionalización y sus ambivalencias.

110. Algunas de las ideas incluidas en este artículo, y gran parte de las entrevistas a las que hace referencia, son fruto de trabajos de investigación sobre gobernanza participativa en los que los autores han participado. Estas investigaciones han sido realizadas en el Instituto de Gobierno y Políticas Públicas (IGOP) bajo la dirección y coordinación del Dr. Marc Parés y el Dr. Ismael Blanco.

10.1. Relaciones pragmáticas, relaciones conflictivas

En los últimos ciclos de movilización social ha habido un *giro pragmático* en las formas de resistir o intentar incidir en los problemas comunes. Son un buen ejemplo de ello las formas de proceder de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), una de las organizaciones de base ciudadana con mayor legitimidad, reconocimiento social y con una capacidad innegable de marcar la agenda política. Al lado de otras prácticas sociales de defensa de los derechos, la PAH se ha caracterizado por buscar soluciones a un problema colectivo: la garantía pública de acceso universal a la vivienda. Ha sido a través de la búsqueda de soluciones concretas que la PAH ha conseguido un alto nivel de agregación de personas «afectadas» que se han convertido en activistas y un notable nivel de replicabilidad en el conjunto del territorio. La PAH es sinónimo de un trabajo perseverante sobre objetivos concretos, pero también una vía efectiva de organizar el empoderamiento político de los ciudadanos, ya sea a través de acciones ordinarias, como detener desahucios, o usando acciones extraordinarias, como la promoción de una Iniciativa Legislativa Popular.

Vemos, pues, que este «pragmatismo» está estrechamente relacionado con la importancia de demostrar que las cosas pueden cambiar o, tal como señala uno de los lemas más populares de la PAH, que «sí se puede». Es este pragmatismo el que ha conducido, también, a establecer metas cortas y diarias (paras desahucios, reapropiarse de viviendas vacías), que puedan ir sumando «pequeñas victorias» que estimulen la estabilidad del movimiento. Y, si bien con otros objetivos y metodologías distintas, este tipo de formas de hacer, este modo *a priori* pragmático de enfocar la relación institucional y de ponerse objetivos posibles, también lo encontramos en las movilizaciones sociales en el campo del urbanismo y la planificación urbana. Si bien durante el período de expansión urbanística las movilizaciones sociales básicamente se caracterizaban por desarrollar acciones reivindicativas en forma de protesta (ya fuera en contra de la ubicación de infraestructuras o de proyectos de crecimiento urbano —que hemos conocido como conflictos territoriales y urbanísticos—), posteriormente se ha pasado hacia métodos de acción más directa (apertura y adecuación de solares, creación de huertos urbanos, diseño y rehabilitaciones de equipamientos autogestionados, etc.) y a una escala mucho más reducida (plazas, equipamientos, solares, parcelas). Esta reorientación pragmática también se hace evidente en el Pla BUIITS. Como nos explicaban desde el Área de Hábitat Urbano del Ayuntamiento de Barcelona:

«En un diagnóstico muy simplificado, ya que estos procesos son mucho más complejos, podríamos decir que las asociaciones de vecinos quieren desarrollar una labor de control, supervisión y rendición de cuentas de lo que el Gobierno local está haciendo, mientras que las nuevas entidades y grupos que trabajan en el espacio urbano —por ejemplo, uno de los grupos de jóvenes arquitectos que participan en el Pla BUIITS— operan más *bajo la lógica de hacer que bajo la lógica de ser informal.*»

Los responsables institucionales del Pla BUIITS coinciden en señalar que las personas más jóvenes que participan en el proyecto, si bien pueden tener enfoques más radicales que entidades como las asociaciones de vecinos, tienen formas más «constructivas»; es decir, «tienen argumentos más claros y, *a priori*, no sienten tanta desconfianza hacia el Gobierno local». Señalan, también, que estos perfiles tienen más propensión al diálogo y, si bien mantienen algunas reservas respecto a relacionarse sin prejuicios con la Administración local, «estas reservas no son tan fuertes como en las asociaciones de vecinos». Es interesante resaltar que estas reflexiones que expresan un cambio de actitud hacia las instituciones las hemos encontrado en entrevistas con otros actores institucionales centradas en problemas que involucraban otras áreas del ayuntamiento, como el Área de Calidad de Vida, Igualdad y Deportes o la Dirección Adjunta de Vivienda, donde también se destacaba que este cambio en las actitudes se observa en la relevancia que han tomado el cooperativismo o el tercer sector.

Pero de este cambio de actitud respecto a las instituciones no se puede inferir que estos actores adopten una posición ingenua. No podemos decir que este pragmatismo conduzca a una subordinación respecto a las instituciones públicas. Pudimos hablar de este tema con un miembro del colectivo *Recreant Cruilles*, que, con otras entidades sociales, están gestionando *Germanetes*, un solar situado en el barrio de la Esquerra de l'Eixample. Nos contaba esta posición, que, más bien, la podríamos pensar como un pragmatismo crítico:

«Desde nuestro punto de vista, el Pla BUIITS es una oportunidad política que la administración pública ha sido capaz de detectar. Muchos de estos espacios son una reivindicación social histórica. Pero el Gobierno local ha reaccionado a estas demandas solo durante la crisis. En nuestro caso se nos ha dado el 10 % de la parcela urbana total, pero esto puede ser un caballo de Troya para empujar, para presionar a las autoridades locales para que estas instalaciones educativas y culturales que prometieron que construirían en este espacio se hagan finalmente.»

En Germanetes hay una alta conciencia de hasta qué punto estas medidas pueden terminar siendo un facilitador de la labor de Gobierno del Ayuntamiento de Barcelona, ya sea para gestionar mejor posibles conflictos urbanos o para trasladar ciertas parcelas de responsabilidad pública a la propia ciudadanía. Creemos que la mayoría de veces eso no responde a una agenda institucional oculta ni a ninguna estridencia conspiranoica, sino que forma parte de las inercias institucionales, es un efecto lógico de querer rediseñar las formas de producir acceso y cohesión que se han ido sedimentando en la Administración pública. Desde Germanetes, este pragmatismo crítico ha permitido establecer una confianza que no es tanto un punto de partida, sino más bien un diálogo en curso que se nutre o se diluye según se van sucediendo los capítulos diarios, con nuevos problemas o con nuevas soluciones. Como nos señalaba el miembro de *Recreant Cruilles*: «Estoy convencido de que los que han tomado la iniciativa de este programa creen completamente en él. Y han sido muy valientes de echarlo hacia delante, lo que no se contradice con mantener un papel vigilante y exigente».

Por otro lado, aparece la amenaza de la burocratización. Han sido muchos los factores que han hecho que esta «gestión del mientras tanto» se vuelva notablemente densa en labores de gestión y en número de requisitos técnicos. Algunos colectivos que participan en *Pla Buits* han tenido que pedir formalmente y pagar por permisos de construcción, así como cursar licencias de actividades para utilizar los espacios cedidos. Un total contrasentido que, muchas veces, los identifica como proveedores privados de servicios. Apuntaban en *Recreant Cruilles* que «desde *Hàbitat Urbano* no han producido soluciones legales para resolver este tipo de problemas. También debemos ir a muchas reuniones y hacer informes de proyectos. Lo hacemos con trabajo voluntario y es realmente muy caro. No podemos terminar convirtiéndonos en los secretarios del ayuntamiento». Esta burocratización ha sido motivo de quejas y de valoraciones críticas por parte de los colectivos de *Pla BUIITS*, lo que señala la capacidad de adaptación de sus códigos que les pide la Administración. De esta forma vemos que, como se señalaba desde *Hàbitat Urbano*, son actitudes menos resistencialistas, más pragmáticas y menos basadas en prejuicios, pero no por eso menos críticas y exigentes. Algunos casos del *Pla BUIITS* nos demuestran que el uso de mecanismos formales de participación ciudadana no significa borrar la posibilidad de usar otros mecanismos que ponen en tensión esta relación con la institución. Eso significa no solo combinar una relación de diálogo y de presión respecto a la institución pública para problemas surgidos por la gestión de recursos concretos, sino también poder

emprender acciones en otras áreas que escalen el espacio reivindicativo, como puede ser el hecho de unirse a campañas por la sanidad o la educación pública. Como concluían desde *Recreant Cruilles*: «No emprendemos acciones ilegales que gusten a la Administración pública o a los vecinos, pero tampoco nos lo tenemos que pensar dos veces si vemos que tenemos que forzar la relación con la institución con la finalidad de obligarla a hacer lo que tiene que hacer. Estamos dispuestos a emprender acciones creativas para denunciar un conflicto o una falta de respuesta institucional ante problemas colectivos».

Como señalábamos en el inicio de este apartado, la PAH ha sido toda una escuela de aprendizaje respecto a estas posiciones de relación institucional compleja. Ha sido este proceso de sindicalismo social el que ha situado el pragmatismo y la relación institucional como método, por un lado, para usar todas las vías legales posibles para resolver problemas colectivos, pero, tirando de esta misma lógica, para emplear la desobediencia cuando al final de los trámites legales no se encuentra una respuesta institucional. Son estos *techos institucionales* los que activan posiciones más disidentes y resistencialistas. Encontramos este mismo espíritu metodológico en Germanetes, que podemos resumir como una forma de hacer política que usa tácticamente relaciones pragmáticas y relaciones conflictivas.

10.2. Los límites institucionales del «mientras tanto»

Una de las cuestiones que señalan de forma recurrente los actores que participan y promueven el Pla BUIITS está directamente relacionada con los límites institucionales o, de hecho, con el objetivo político último sobre el que navegan los proyectos como el Pla BUIITS. En concreto, nos referimos a si hablar de un «mientras tanto» tiene que ver con ensayar las posibilidades de un período de experimentación institucional o, en una versión más dramática, dilapidar energías comunitarias en un proceso sin cambio o innovación institucional. En las miradas más oscuras de lo que la institución persigue, veríamos un proceso de instrumentalización de las comunidades vivas sobre el territorio para llenar con valor social la desvalorización del suelo. En las miradas más optimistas de estos mismos procesos, lo consideraríamos como una acción institucional intrépida, que ve una oportunidad en el proceso de desvalorización del suelo edificable para potenciar las prácticas urbanas socialmente innovadoras. ¿Instrumentalizar las comunidades o potenciarlas? ¿Innovaciones institucionales o parches? Decantarse por una postura o por la otra sin contrastarlo con las personas protagonis-

tas amenaza con no ser muy útil. A continuación, intentamos ofrecer algunas ideas para clarificar este planteamiento y, en la medida de nuestras posibilidades, darle más matices.

A menudo se ha apelado a la cesión del uso de vacíos urbanos con argumentos de temporalidad: solo falta esperar a que acabe la crisis para poder desarrollar el planteamiento vigente. Dicho de forma muy sintética, la idea que sostiene todo esto, y que lo vincularía con el pragmatismo que antes comentábamos, sería: mientras no construyan el equipamiento que estaba programado, hagamos un huerto urbano. Las iniciativas ciudadanas parecen tener cabida en este «mientras tanto». Pero no hay que insistir mucho en el hecho de que las bases de un nuevo urbanismo, que gestione el estallido de la burbuja inmobiliaria, difícilmente se podrán construir a través de prácticas urbanas localizadas y temporales. Se requieren cambios legislativos —no flexibilización— y establecer redes de colectivos ciudadanos no solo a escala local, sino metropolitana y más allá. Y es justo aquí donde encontramos un primer límite, que hemos visto expresado de distintas formas. Uno de los responsables institucionales del Pla BUIITS nos presentaba un problema directamente relacionado con uno de los retos de enmarcar el Pla BUIITS en el ámbito institucional:

«El Pla BUIITS es, de hecho, un proceso de privatización del espacio público. Estamos cediendo temporalmente un espacio de propiedad pública a unas entidades privadas. El concepto de privatización que tiene la Administración es, por ejemplo, los chiringuitos de playa, que es un proceso muy regulado. Y resulta que, si intentas poner un bar en Germanetes, tienes que emplear el mismo modelo que se está gestionando para un chiringuito. Este procedimiento imposibilita poner un bar en Germanetes.»

Esto plantea un problema. Por un lado, que la temporalidad suponga provisionalidad continua, donde el modelo comunitario solo exista en las mentes de los que lo practican, pero sin dar paso a una expresión jurídica concreta. Eso es lo que deja encarnar con garantías institucionales los modelos de gestión prefigurados en las prácticas comunitarias. Es desde estas limitaciones que se plantea la necesidad de innovar en el reglamento:

«Antes de ceder un espacio, hay que definir un presupuesto, ya que el espacio cedido puede estar en mal estado o se tiene que adecuar al proyecto que se quiere realizar —para un huerto urbano se precisan intervenciones que adapten el espacio—. Pero cuando se puso en marcha el

Pla BUIITS no había presupuesto para ningún tipo de obra. Eso es debido a un sentimiento un poco ingenuo, de no haber palpado la realidad y sus necesidades. Este tipo de innovación es importante y se basa en la seguridad más que en el paternalismo.»

Como señalaban desde el Ateneu Popular Nou Barris —espacio que no formaba parte del Pla BUIITS pero que es una referencia ineludible en la gestión colectiva de infraestructuras—, «si los proyectos viven con la incertidumbre a medio plazo de la renovación o no de las concesiones, es difícil llevar adelante estructuras de segundo grado a la hora de establecer coordinaciones de ciudad o de generar bancos de recursos comunes. Y eso, entre otras cosas, dificulta que se pase de la lógica de barrio a la lógica de ciudad».

Por otro lado, desde Hábitat Urbano se recordaba que la responsabilidad para que la temporalidad y la focalización en espacios muy concretos no produzca proyectos hiperlocales o, incluso, solamente consiga consolidar prácticas autorreferenciales, también es de los colectivos y las comunidades. En sus propias palabras:

«El reto para la administración es innovar en el procedimiento. Toda maquinaria administrativa tiene que poder facilitar que estas entidades ciudadanas lleven adelante estos proyectos. Por parte de las entidades ciudadanas, se trata de hacer cosas que tienen que ir mucho más allá de consolidar un huerto urbano en un espacio cedido por 3 años. Germanetes, como pequeño ejemplo de ir más allá, se ha metido en el proyecto Superilles. Están intentando decir cómo quieren que sea el barrio, no solo el espacio Germanetes. Si en diez años en Germanetes se continúa haciendo cine alternativo y cultivando patatas, no habremos conseguido gran cosa. Será un fracaso para la Administración. Aquí es donde debe surgir la “generación puente”, gente que desde la institución haga el trabajo que nosotros hicimos en nuestra época.»

Por lo tanto, se trata de cambiar la reglamentación y, también, los procedimientos habituales. Tanto de la institucionalidad pública como de la institucionalidad comunitaria. Por parte de la institución, la tendencia ha sido intentar adecuarse puntualmente a excepciones pidiendo a la capa funcional que otorgue un permiso de forma distinta a la que está reglamentada. La dependencia del rumbo institucional, tanto en las figuras técnicas empleadas como en los modos de atender los nuevos problemas, ha estado muy presente desde el inicio. Y, como señalan los manuales de ciencia po-

lítica, si hay una gran dependencia del rumbo institucional, el cambio institucional se convierte en un reto de escala épica.

Así pues, que afloren los límites del «mientras tanto» depende de si este momento de experimentación institucional supone cambios en las logísticas comunitarias y, sobre todo, si implica cambios en las formas de hacer de la propia Administración. En el primer caso, intentando crear redes y/o incidiendo en otros procesos a escala metropolitana; en el segundo caso, ofreciendo garantías jurídicas y generando nuevas figuras que no actúen como ortopedias sobre la gestión comunitaria y que limiten su potencialidad. No podemos cerrar este apartado sobre los límites del «mientras tanto» sin señalar que la apuesta institucional debe ser ambiciosa y no simplemente puntual y compensatoria respecto a la lógica que ha sido hegemónica en Barcelona. No podemos olvidar que, al mismo tiempo que se desarrollaba la primera edición del Pla BUIITS, diferentes proyectos urbanísticos de gran envergadura se tramitaron al margen de la ciudadanía y las comunidades locales. La ampliación de La Maquinista, el proyecto Kids Sagrera, la reforma del Port Vell y un largo etcétera lo ejemplifican. Y es en estos proyectos donde aún se observan las viejas tendencias de concebir el suelo como un mero producto de intercambio al servicio de grandes agentes privados. Y es esta dinámica la que, sumada a los problemas señalados en este punto, puede hacer entender el «mientras tanto» como una forma sofisticada de diluir procesos de transformación social.

10.3. ¿Quién se institucionaliza?

Una de las cuestiones clave para analizar los procesos de institucionalización y cómo pueden repercutir positivamente en las prácticas colectivas es ver si hay un reconocimiento de nuevos actores sociales, si suponen un canal para dialogar y negociar con sujetos hasta ahora invisibles en las decisiones de la ciudad. Uno de los objetivos de un proceso de institucionalización debería ser el empoderamiento de clases subalternas y de colectivos vulnerables, un indicador de la buena salud de una democracia municipal. Una muestra de esta apertura fueron las asambleas de barrio del 15M, que operaron bajo la lógica de procesos participativos abiertos y asamblearios que conseguían reunir a multitud de perfiles. Pero, no es necesario recordarlo, el 15M no fue un proyecto de la Administración pública. ¿Ha conseguido el Pla BUIITS imbricarse productivamente con este entramado social?

En principio, en los colectivos que participan en el Pla BUIITS observamos un cambio en las interlocuciones con la institución. Si bien las asocia-

ciones de vecinos han sido históricamente los interlocutores privilegiados de proyectos de planificación urbana, responsables de Hábitat Urbano nos explicaban que conceder «toda la representación social a las asociaciones de vecinos podía llegar a ser un poco perverso». En este punto, cabe destacar que muchos proyectos presentados en el Pla BUIITS son dirigidos por grupos de arquitectos y entidades jóvenes nacidos a raíz del 15M y que han articulado sus iniciativas con asociaciones tradicionales del barrio. La característica de este programa es el vínculo entre las organizaciones sociales y comunitarias, una combinación que vincula entidades tradicionales y nuevos actores sociales. Un ejemplo claro de esta mezcla es la iniciativa Porta'm a l'hort, impulsada por un grupo de arquitectos jóvenes que utilizaron la estructura legal de la asociación de vecinos de Porta para presentarse al concurso público. Porta'm a l'hort es una iniciativa que quiere construir un espacio de sociabilidad entre vecinos y vecinas y un nexo con la reivindicación de la plaza Sòller, espacio que diferentes asociaciones y colectivos quieren recuperar para el barrio.

Pero, si bien la heterogeneidad de liderazgos es un elemento interesante en el conjunto del Pla BUIITS, también hemos ido observando cómo tomaba centralidad un segmento social muy específico. Como señalaba un responsable de Hábitat Urbano, «... en algunos Pla BUIITS predomina más un perfil social muy concreto —arquitecto, clase media cultural con título universitario, con red social, etc.—. Es cierto que si solo se queda, como diríamos en nuestra generación, una *gauche divine*, eso tampoco evoluciona demasiado».

Tal y como aparecía en el Mapa de la Innovación Social de Cataluña de la investigación Barris i Crisi,¹¹¹ las prácticas socialmente innovadoras surgen allí donde hay más recursos para que fructifiquen. Barris i Crisi nos ha permitido comparar la distribución de distintos perfiles socioeconómicos en el territorio barcelonés con los lugares donde se localizan prácticas de innovación social. A partir de este estudio observamos que los lugares donde se concentran estas prácticas socialmente innovadoras no son aquellos donde reside la gente con mayor renta o menor renta. Las personas con más recursos no tienen necesidad de innovar socialmente y las que tienen menos no tienen la capacidad para responder de forma autónoma a

111. El título completo del estudio es *Barris desfavorits enfront la crisi: segregació urbana, innovació social i capacitat cívica*. Esta investigación está coordinada por el Dr. Ismael Blanco (investigador principal), el Dr. Oriol Nel·lo, el Dr. Quim Brugué y el Dr. Eduard Jiménez. Recibió el apoyo del Programa RecerCaixa. Para más información, ver: <<http://barrisicrisi.wordpress.com/>>.

sus necesidades. Por lo tanto, aquellos barrios con más dificultades económicas, con un tejido social menos estructurado y que deben poner toda su obstinación en la cobertura de las necesidades básicas, tienen mayores dificultades para poder reapropiarse de sus espacios públicos. Y es que, en parte, los liderazgos de estas prácticas urbanas recaen en aquellos segmentos sociales que, si bien no acumulan grandes masas de recursos económicos, sí que tienen recursos culturales, cognitivos y capital social que les permiten organizarse para intentar resolver algunas demandas sociales o liderar proyectos urbanos con valor social. Como señalaban los responsables institucionales de Pla BUIITS: «Si bien son procesos asamblearios, hay liderazgos en perfiles como los arquitectos, porque tienen más reconocimiento y más conocimientos, etc.».

De nuevo nos enfrentamos a un proceso ambivalente. Por un lado, si el liderazgo recae sobre ciertos perfiles sociales, tenderán a ser los sujetos reconocidos institucionalmente y serán estos actores los que acumularán cada vez mayor capital social y simbólico. Pero por otro lado, estos capitales acumulados en perfiles individuales, si son gestionados comunitariamente, podrán revertir en el espacio común. De esta forma, es el sujeto colectivo el que sale beneficiado y los liderazgos funcionan como medios (y no como fines) para facilitar interlocuciones y para acumular legitimidad. Un nuevo reto es lograr producir alianzas transversales entre clases medias culturales, clases populares, organizaciones ciudadanas clásicas y nuevos sindicalismos sociales. Si, además, se generan mecanismos comunitarios para distribuir legitimidades, reconocimientos y recursos, un proceso de institucionalización como el que plantea el Pla BUIITS podría llegar a producir cambios en las relaciones de poder existentes y empoderar segmentos sociales subalternos. El reverso de este proceso, ya se sabe, es el *free rider* o el polizón. Es decir, un sujeto individual que maximiza sus beneficios sobreexplotando los recursos producidos por la comunidad. Para arrojar un poco de luz y analizar este tipo de liderazgos relacionados con la acción colectiva, podríamos acudir a los estudios de Elinor Ostrom. Esta politóloga norteamericana combinó las estrategias del nuevo institucionalismo con investigaciones realizadas en el campo de la biología con el objetivo de comprender mejor los modelos de autogestión y autoorganización de los procesos de acción colectiva. Ostrom analizó algunos de los principios fundamentales que se deben dar para que la gestión comunitaria (es este caso, de recursos naturales) sea efectiva, perdure y evite que el racionalismo económico del *free rider* prive a la comunidad de la posibilidad de producir beneficio compartido. Las propuestas que emergen del trabajo de Ostrom son, en el fondo, principios democráticos. En concreto Ostrom

desglosa una serie de principios de diseño característico de instituciones comunitarias como, entre otros, principios de transparencia, sanciones por el mal uso del recurso, mecanismos de resolución de conflictos, posibilidad de cambiar reglas, acceso a información para participar en el auto-gobierno, etc.

Es interesante ver cómo esto se puede estar produciendo de forma informal o a través de mecanismos que la comunidad ha sistematizado en algunos de los proyectos del Pla BUTS. Es probablemente un sistema de gobierno comunitario quien, si bien no sirve para resolver automáticamente qué tipo de perfiles sociales pueden participar, ejercer liderazgo o producir alianzas, puede asegurar que la institucionalidad que se produzca responda a un sujeto colectivo y no a recorridos individuales.

10.4. Conclusiones

Hasta aquí, hemos recogido varias reflexiones sobre los retos que presenta la activación de vacíos urbanos. Hemos evidenciado que en el último ciclo de las movilizaciones sociales se ha tendido a la reivindicación mediante la construcción, más que mediante de la protesta. A partir de las voces de los actores implicados hemos evidenciado que el Pla BUTS representa una ventana de oportunidades por lo que respecta a la gestión comunitaria de los espacios públicos. A pesar de ello, también implica algunos riesgos.

El giro pragmático en las iniciativas comunitarias y la oportunidad de dinamizar vacíos urbanos podrían llegar a ser un elemento facilitador de la labor de gobierno, pero las experiencias vecinales que gestionan espacios públicos son conscientes de ello y están dispuestas a aprovechar este resquicio para espolpear a la Administración para que haga cambios más estructurales. Queda demostrado que «el urbanismo del mientras tanto» puede ser un caramelo envenenado si no aparecen nuevas formas de gestión urbana en los campos legislativo, administrativo y jurídico.

Por último, es importante señalar un tema que consideramos clave para este tipo de debates y es que institucionalizarse puede significar más dependencia o más autonomía. Más dependencia si hablamos de institucionalización con una Administración pública poco permeable al cambio institucional, ya que ello puede terminar codificando todas las acciones de las comunidades mediante un exceso de regulación y normativización estandarizada. Más autonomía si hablamos de institucionalización comunitaria, ya que ello significará que las normas, reglas, derechos y obligacio-

nes de las comunidades han sido autoproducidas y se adecuan a las propias prácticas de los espacios colectivos.

La duda es si este doble proceso de institucionalización puede articularse de forma virtuosa, produciendo relaciones mutuamente productivas entre estos dos tipos de institucionalidad. Probablemente el reto más importante al que nos enfrentamos no es simplemente intentar unir de forma desequilibrada lógicas distintas para resolver problemas comunes, sino generar institucionalidades publicocomunes. Es decir, modos de hacer que puedan absorber la capacidad de la Administración pública para escalar procesos y para garantizar el acceso y la capacidad de la gestión comunitaria para imbricarse con las prácticas sociales y culturales vivas de los territorios.